

Crisis en Ecuador, crisis en Iberoamérica

El pasado abril, después de varias semanas de revueltas ciudadanas, el presidente de Ecuador llegaba exiliado a Brasil tras su destitución, situación no nueva en los últimos años en la enrarecida atmósfera política iberoamericana. Ante esto la opinión pública se hace una serie de preguntas: ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Cuáles han sido las razones de este proceso? ¿Quién está detrás de este movimiento? No es fácil encontrar respuesta para estas preguntas, pero la dificultad no evita el intento, a través de una revisión de los hechos y de una mirada hacia el contexto mediato e inmediato en el que se generaron.

Crisis en Ecuador

Lucio Gutiérrez llegó a la presidencia el 15 de enero de 2003, con el apoyo de cerca de tres millones de votos de los ecuatorianos que creyeron en sus promesas de justicia social. Este personaje es el mismo que tres años antes, en enero del año 2000, había protagonizado una revuelta cívico-militar para derrocar al entonces presidente Jamil Mahuad. La revuelta le proporcionó una imagen de héroe capaz de sacrificar su carrera militar por salvar a Ecuador de la corrupción. Su mandato debía acabar en el 2007; pero las protestas populares que se desarrollaron en

Quito a lo largo de todo el mes de abril de 2005 terminaron con su destitución. Estas revueltas fueron la escena final de una larga historia: el descontento viene de muy atrás.

El 6 de abril de 2004 la corte electoral inició una investigación de las cuentas de la campaña presidencial de Gutiérrez: se le acusaba de haber recibido contribuciones ilegales de un partido mexicano de izquierda, en contra de la ley electoral que prohíbe expresamente este tipo de prácticas. La oposición añadió cargos por malversación de fondos públicos en noviembre de ese mismo año. Como respuesta, el 26 de noviembre, la mayoría oficialista en el Parlamento tomó el control del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral; y el 8 de diciembre, Gutiérrez destituyó a 27 de los 31 magistrados que integraban la Corte Suprema de Justicia que le estaban juzgando y los reemplazó por jueces afines. El 14 de diciembre empezaron las primeras protestas callejeras contra esta intervención en el poder judicial.

En enero de 2005 las manifestaciones se multiplicaron por Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Ambato. El Congreso intentó solucionar el conflicto destituyendo a la nueva Corte y renovando su cuerpo de magistrados; pero los ánimos estaban ya demasiado caldeados como para aceptar soluciones de este tipo. El 13 de abril miles de personas reclamaron la salida de Gutiérrez, en una oleada de protesta que se fue extendiendo desde Quito hacia otras ciudades del país.

La gota que colmó el vaso del descontento popular fue que el tribunal designado por Gutiérrez había dictaminado la anulación de los juicios pendientes contra los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram, de triste memoria para los ecuatorianos, con lo que ambos podrían retornar sin cargos desde sus exilios respectivos: Panamá y República Dominicana. El populista Bucaram, apodado «el loco», lo hizo y comenzó a dar muestras de su acostumbrado histrionismo de carnaval, con actos públicos en los que, al tiempo que cantaba y bailaba, amenazaba con su regreso a la escena política.

Ante la situación, Gutiérrez declaró el 15 de abril el estado de emergencia en Quito, y decretó el cese de los 31 magistrados que él mismo había nombrado; y al día siguiente revocó el estado de emergencia

para tratar de recuperar la tranquilidad de las calles. Fue inútil: el 19 de abril una marcha masiva fue reprimida duramente, lo que provocó la muerte de un periodista y un manifestante, así como otros muchos heridos. Ya nadie estaba dispuesto a que siguiera gobernando Gutiérrez. «¡Que se vayan todos!» fue la consigna más repetida por los manifestantes, entre los que podía verse un buen número de ciudadanos de clase media que pedían una reestructuración profunda del Estado.

La salida de esta fase de la crisis fue la destitución por «abandono de cargo», dictada por sus opositores del Congreso; y el nombramiento del vicepresidente de Gutiérrez, el centroizquierdista Alfredo Palacio, de 66 años de edad. La Fiscalía dispuso el arresto de Gutiérrez por la represión policial, las fuerzas armadas le negaron su apoyo; y Gutiérrez tuvo que refugiarse en la Embajada de Brasil. Eludiendo el acoso de quienes pedían su castigo, pudo salir hacia el asilo que le brindaba Lula Da Silva el 24 de abril.

En Brasil también vive otro ex presidente, el dictador paraguayo Stroessner, de 93 años. Los manifestantes han vuelto a sus casas, pero todavía está abierto el proceso de formación del nuevo gabinete ministerial y se espera que pronto se convoquen nuevas elecciones. El descontento popular sólo ha dado una tregua que no se sabe cuándo se romperá.

La situación no es nueva para los ecuatorianos. Lucio Gutiérrez es el tercer presidente consecutivo que no llega al final de su mandato, tras Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. El último presidente que completó su legislatura fue Sixto Durán Ballén, quien gobernó desde 1992 a 1996. Desde dicho año, se ha ido agudizando el descontento, con crisis de gobierno sucesivas.

Bucaram, a quien el Congreso destituyó por «incapacidad mental para gobernar» cuando llevaba sólo seis meses en el poder, fue reemplazado por el presidente interino **Fabián Alarcón**, entonces presidente del Congreso, quien adelantó las elecciones tras permitir que la vicepresidenta **Rosalía Arteaga** ocupara la magistratura por sólo tres días. **Alarcón** gobernó hasta agosto de 1998.

En las elecciones de 1998 es elegido el democristiano **Jamil Mahuad**, responsable de una serie de medidas económicas controvertidas que

también encontraron la respuesta de la calle, hasta su destitución, en enero de 2000 —el propio Gutiérrez ahora destituido estuvo entonces al frente de la revuelta—. El sustituto de Mahuad fue —como vuelve a ocurrir ahora—, su vicepresidente, **Gustavo Noboa**, quien tampoco encontró como presidente apoyo a su plan de reajuste económico: la hostilidad popular, sobre todo de grupos indígenas, culminó con su destitución.

Ante este escenario de protestas, destituciones, interinidades, protagonismos de vicepresidentes, crisis económica e institucional que se repiten periódicamente en el ámbito americano, surgen demasiados interrogantes y varias semejanzas y paralelismos que los multiplican. ¿Son procesos meramente coincidentes con los que se viven o han vivido en otros países americanos? No creemos que sea éste un proceso aislado ni exclusivo de Ecuador.

Crisis en Iberoamérica

Todavía están presentes en nuestra retina las **manifestaciones bolivianas** contra la comercialización del gas que, si bien podría haber supuesto una importante fuente de riqueza para el país, ha encontrado el boicot de los grupos indigenistas, lo que también acabó con la destitución del presidente Sánchez de Lozada, con revueltas y 74 personas muertas; y con las difíciles situaciones que está viviendo el presidente actual, Carlos Mesa.

No están más lejos las revueltas peruanas contra Toledo, que amenazaron con acabar abruptamente su mandato no hace mucho; o la **crisis argentina** del 2001, por el *corralito*, que llevaron a una protesta popular de proporciones inusuales, saldada primero con la destitución del radical De La Rúa, luego con presidentes interinos hasta las elecciones que dieron la presidencia al controvertido Néstor Kirchner.

Si volvemos la vista a otros países del entorno, la situación no parece mejor: el acuciante problema de la **violencia colombiana**, guerrillera y social, que amenaza día a día una frágil democracia; el **populismo venezolano** de un Hugo Chávez crecido por el apoyo de sus huestes *bolivarianas* y por la importancia que la producción petrolera tiene en la actualidad, ha traspasado todos los límites de la legalidad democrática.

Más allá de los hechos

No cabe duda de que la política iberoamericana está sumida en una profunda crisis, salvo en contadas excepciones, para la que no se ve solución a la vista. Los políticos son rechazados por la sociedad, los partidos están anquilosados, no canalizan ni representan las expectativas de los pueblos. El déficit no es sólo de prestigio, ni de la balanza comercial, es fundamentalmente ético. La corrupción generalizada de todo aquel que puede contar con el poder —empresarios, políticos, sindicalistas— ha llegado a cotas tan elevadas y durante tanto tiempo, que cualquier situación puede encender la mecha de las revueltas.

Las políticas económicas, además, que desde la llamada década perdida —los 80— se han venido desarrollando desde el Norte respecto del Sur, han supuesto el enriquecimiento de unos pocos, y el empobrecimiento de los más. Las recetas neoliberales, la deuda externa, la globalización de los 90 potenciaron la desigualdad social, la injusticia. Se calcula que el número de pobres de América Latina ha crecido desde 1970 a 2000, de 130 a aproximadamente 200 millones de personas. La disminución de la acción del Estado para paliar la miseria, la profundización de la pobreza en la década de los 80 y los 90 han dejado sin esperanzas a los pobres; y a los *pobres estructurales* se añaden ahora los *nuevos pobres* y los *pobres de nuevo* de las clases medias.

La gota que colma el vaso de cada situación puede ser, desde una medida económica hasta un cambio de jueces: como el descontento está en las raíces de la sociedad, en las varias generaciones de clase media que han visto desaparecer sus logros educativos, sanitarios, económicos, tanto como en las de los indigentes que nunca los han conocido ni han disfrutado de ellos, la protesta cuenta con un amplio apoyo potencial de descontentos, que lamentablemente también saben aprovechar para sus propios fines los agitadores y desestabilizadores sociales. El crecimiento social, educativo, sanitario y democrático no ha evolucionado de forma paralela al demográfico de la mayoría de países iberoamericanos: el desequilibrio entre pobres y ricos se hace entonces más agudo. El resentimiento, el desánimo, la desilusión tienen aquí su caldo de cultivo, con una violencia social creciente y cotidiana.

Siete millones de niños viven en la calle en Iberoamérica, que se ha convertido en los años 80 y 90 en la segunda región con más violencia

delincuencia en el mundo: en 1994 su tasa de homicidios fue de 28,4 por cada 100 mil habitantes, después de algunos países del África Subsahariana (40 por cada 100 mil). Ciertamente la pobreza no es el único factor de la delincuencia, y el riesgo de esta identificación es su criminalización; pero el crimen organizado, las bandas de narcotraficantes, reclutan con facilidad a sus infanterías entre los jóvenes que viven en la pobreza marginal urbana. No se trata de una violencia sólo coyuntural, sino estructural y, al decir de algunos estudiosos, de siglos, endémica desde la conquista hasta hoy, con matanzas, expulsiones forzadas de la población, guerrilla, como algunas de sus graves consecuencias.

Y larga es la historia de la manifestación del descontento social a través de movimientos sociales violentos, por poner sólo algunos ejemplos, el *caracazo* venezolano de 1989, el alzamiento zapatista (1994), las *puebladas* del interior argentino (1989–1996); y de los grupos que los protagonizan, como los *cocaceros* bolivianos, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, o el Consejo Nacional Indígena de Ecuador, que han venido protagonizando diversas revueltas en las últimas décadas.

Las tentaciones autocráticas de los políticos hispanoamericanos han cometido tantos excesos en el pasado reciente, olvidando sus promesas populistas de combatir la pobreza y representar los intereses de los ciudadanos, que los pueblos encuentran pronto un motivo para salir a la calle, para deponer al mismo presidente que una vez votaron. Prácticamente no hay ex presidente hispanoamericano que no cuente en su haber con varias causas pendientes por corrupción, que los jueces afectos no castigan. La impunidad del poderoso es tan manifiesta, que el ciudadano común aprende pronto, por analogía, que todo vale y en todos los planos.

Quien sufre al fin es la gente, el propio sistema democrático, el entramado social del que podría, precisamente, surgir la recuperación. La gente mejor preparada suele buscar una solución fuera, engrosando las listas de la emigración al primer mundo, tratando de evitar el desempleo, la violencia, la desesperanza. Aunque en América Latina las materias primas son abundantes, los recursos ingentes, la ausencia o la destrucción de la actividad industrial no proporciona fuentes de trabajo adecuadas a sus posibilidades. Ni Ecuador ni muchos países de América son pobres: por el contrario, sus riquezas naturales son enormes. La paradoja es que

no suponen para sus ciudadanos beneficios ni trabajo, porque entre otras causas, la economía mundial de los países desarrollados limita, para proteger sus propias producciones, las posibilidades de comercialización del Sur. No pueden competir libremente en el mercado mundial, pero están obligados a adquirir los productos industriales al Norte.

En estos tiempos de demanda especial, Ecuador tiene en el petróleo de su Amazonia un potencial de desarrollo único, que paradójicamente no mejora la situación. Los cultivos de café —que hasta exporta a Colombia—, caña de azúcar, arroz, plátanos; o los bancos de peces y mariscos de sus costas no garantizan la mejora de la economía interna porque su comercialización está limitada por el proteccionismo que ejercen EE UU y la UE sobre sus propias economías, y los beneficios obtenidos van a dar a cuentas bancarias situadas en el extranjero.

¿Hay bases para la esperanza?

Una mirada objetiva y desapasionada al continente nos lleva a pensar que el fantasma de la lucha social radical recorre Iberoamérica. La percepción se agudiza cuando vemos que los únicos presidentes que se mantienen en sus cargos cultivan un populismo elemental pero efectivo para sus fines.

En Argentina, Kirschner, un ex montonero que reeditando viejos tiempos propone como vicepresidenta a su propia esposa, ha provocado la emigración masiva de los mejores profesionales que ha formado el país; pero sostiene y ampara a grupos *piqueteros* afines a sus intereses por temor a la revuelta popular.

En Venezuela, el antes coronel golpista, hoy presidente Chávez que con sus promesas electorales de liberar al pueblo de la pobreza y de la corrupción secular ganó el poder en las urnas, la conjura mediante un sistema de persecución política de corte castrista que ha sumido a la clase media en el desánimo o la ha empujado a la emigración.

En Uruguay acaba de ganar un partido de neto corte populista, en el que sus más destacados miembros no superan los mínimos educativos exigidos en un país que por la cultura de sus gentes y su situación económica en otros tiempos fue la *Suiza americana*; pero cuentan con un apoyo claro en las urnas.

La disyuntiva parece estar entre populismo o destitución; y los líderes toman buena nota, explotando un discurso populista y xenófobo que conecta con el resentimiento social. La culpa, vienen a decir, la tienen siempre los capitalismos de fuera. El imaginario de un hostigamiento exterior da muy buenos réditos a los líderes mesiánicos; pero lleva a la población desinformada a pensar que, como la culpa la tienen otros, no pueden los individuos hacer nada por salir de ella. La cultura del trabajo se ha desvirtuado entre amplias capas de la población de forma inequívoca.

La crisis ecuatoriana no es sino un botón de muestra del contexto iberoamericano, lamentablemente; y el cansancio de una población que se ve abocada a la migración para garantizar la supervivencia de los suyos no toca a su fin. La actuación de ciertos políticos y sus perniciosos efectos, así como la no adaptación a las nuevas y duras condiciones que impone la globalización, han abierto una brecha entre políticos y pueblo que parece insalvable. El fenómeno no está ausente del mundo desarrollado, pero aún con cierta credibilidad en las instituciones, que suplanta este déficit. La política parece estar ahora en manos de los populistas que siguen halagando con falsas promesas a la ciudadanía, de los jueces, de los agitadores sociales y de los periodistas.

En la sociedad de masas del mundo globalizado, tiene más fuerza una antena televisiva, una campaña publicitaria de imagen, que la mejor de las políticas económicas. En Iberoamérica, también, máxime cuando la televisión no falta en la *favela* o en la *villa miseria*, aunque no tengan que comer cada día. Hace falta una reforma urgente de los partidos que devuelva la confianza hacia la institución política y hacia la democracia; pero sobre todo una verdadera revolución social y ética que los actuales líderes no pueden ni quieren emprender. ■